

**EXPEDIENTE: IEEM/SE/AE/37/2014**

Toluca de Lerdo, México, a once de febrero de dos mil quince.

**VISTOS** para resolver los autos que integran el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/37/2014**, formado con motivo del posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria para la integración de las Juntas Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2014-2015; por parte del **C. Marco Antonio Galván Gutiérrez**, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México; y

**R E S U L T A N D O**

1. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el Acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, relativo al Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015, el cual contiene los lineamientos para la designación de los vocales de dichos órganos, así como la convocatoria respectiva.
2. La convocatoria señalada en el resultando anterior, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta del Gobierno" en fecha once de agosto del año dos mil catorce, en los estrados del Instituto y en la página electrónica oficial, divulgación que se mantuvo a partir de la fecha citada, hasta el treinta y uno de octubre de esa anualidad.
3. Entre el dieciocho de agosto y el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se desarrolló, en sus distintas fases, el procedimiento para la integración de las propuestas de los Vocales Distritales y Municipales.
4. En sesión extraordinaria de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante acuerdo número **IEEM/CG/68/2014** designó a los vocales de las Juntas Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, entre quienes resultó designado el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México.
5. A través del oficio número **RPCG/IEEM/012/2014**, de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, suscrito por el C. Javier Rivera Escalona, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, se objeta la designación del C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número

109 con sede en Tultepec, México, ya que según su dicho, es afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

6. A través del oficio número IEEM/SE/1721/2014, de fecha diecinueve de noviembre del año próximo pasado, se solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, el Lic. Eduardo G. Bernal Martínez, informara a la Secretaría Ejecutiva, si el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, se encuentra afiliado al partido que representa.

7. Asimismo, mediante oficio número IEEM/SE/2085/2014, de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, y en alcance al diverso IEEM/SE/1721/2014, se solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, el Lic. Eduardo G. Bernal Martínez, informara a la Secretaría Ejecutiva, si el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, se encuentra afiliado al partido que representa.

8. Por acuerdo de la Secretaría Ejecutiva emitido el quince de diciembre del año dos mil catorce, se ordenó que con las constancias atinentes, se integrará el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/37/2014**, así como que se diera vista al ciudadano cuya designación se cuestiona, para que en un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, desahogara por escrito su garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho conviniera y ofreciendo las pruebas documentales que para esos efectos estimara convenientes.

9. En fecha dieciocho de diciembre del dos mil catorce, el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto, su escrito mediante el cual dio cumplimiento al acuerdo inmediato anterior.

10. Por acuerdo de la Secretaría Ejecutiva emitido el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se integró el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/37/2014**, con la información que ésta obtuvo con las actuaciones realizadas, ordenando elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

11. La Presidencia de la Comisión Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, presentó ante sus integrantes el presente proyecto de resolución, ordenando la propia Comisión su remisión al Consejo General, para su aprobación definitiva, en su caso.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. Competencia.** Con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número **IEEM/CG/68/2014**, este Consejo General se encuentra facultado para designar a los vocales de dichos órganos desconcentrados y, en su caso, para sustituirlos; por tanto, es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata del procedimiento instaurado con motivo de la posible sustitución de un ciudadano designado como vocal municipal del Instituto, por el presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de mérito.

**SEGUNDO. Estudio de fondo.** Previo al estudio de la litis, es conveniente destacar las siguientes consideraciones vinculadas al sentido que habrá de darse a la presente resolución:

### a) Marco normativo.

La reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, introdujo múltiples adecuaciones al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo para el presente caso, tener en consideración las acaecidas al artículo 1º constitucional.

De acuerdo con el párrafo primero de dicho precepto, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma establece.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo bajo análisis establece, que las normas concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a favor de que a las personas se conceda la mayor protección. En consonancia con ello, el párrafo tercero ordena a **todas las autoridades**, acorde a sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los informan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

Así, es posible sostener que los párrafos segundo y tercero del artículo 1º constitucional, se instituyen como una norma guía para **todas las autoridades** del

país, a efecto de que éstas velen en todo momento por los derechos humanos, adoptando las acciones más adecuadas para ello, conforme a sus respectivas atribuciones.

En la especie, los artículos 35, fracción VI, de la Carta Magna, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho fundamental a ser nombrado para cualquier empleo o comisión público, en condiciones de igualdad, **teniendo las calidades que establezca la ley**. Tal derecho incluye el particular de acceso a los órganos electorales, cuya tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte de éstos, ya sean de máxima dirección —es decir de carácter central— o desconcentrados, tanto de las autoridades administrativas como de las jurisdiccionales de la materia, según ha razonado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 11/2010, publicada en las páginas 27 y 28 de la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 3, número 6, correspondiente a 2010, cuyos rubro y texto se citan a continuación:

**INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.**—

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17; 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, se advierte que el derecho ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, incluye aquellos relacionados con la función electoral, es decir, su tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte como integrantes de los órganos, de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales estatales.

**Cuarta Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-4/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.—10 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Luis Alberto Balderas Fernández.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1/2010.—Actor: Jorge Luis Benito Guerrero.—Autoridad responsable: Dirección de Organización Electoral de la Dirección General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Carlos Vargas Baca.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Uninstancial del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos, con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente:*

*María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—  
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.*

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil diez, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Del mismo modo, la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país, ha sostenido reiteradamente que los derechos contenidos en el artículo 35, de la Carta Magna, son de base constitucional y de configuración legal, y que no son absolutos ni ilimitados, sino que pueden estar sujetos a ciertas y determinadas restricciones **previstas en la ley**, pero siempre que éstas **no sean irrazonables, desproporcionadas, caprichosas ni arbitrarias, y que no afecten su contenido esencial**. Dicho criterio deriva de las resoluciones recaídas a los expedientes SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, acumulados; SUP-JDC-494/2012, SUP-JDC-3234/2012, SM-II-JDC-011/2000, SM-II-JDC-096/2000 y SM-II-JDC-097/2000, por mencionar sólo algunas.

En consecuencia, de la interpretación de los artículos 35, fracción VI, de la Constitución General de la República, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con relación a los párrafos segundo y tercero, de la misma Ley Suprema, se desprende que las autoridades en la materia tienen el deber jurídico de respetar y hacer vigentes los derechos humanos de carácter político-electoral, entre los que se encuentra el de acceso a los cargos públicos electorales, mediante las acciones que fuesen necesarias para dar vigencia o efectividad a tales derechos, pero también, absteniéndose de realizar cualquier acto que los vulnere o los haga nugatorios de cualquier manera.

Ahora bien, en términos de los artículos 41, Base V, Apartados A y C, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 168, 169, párrafo primero, 173, 174, 178, 185, fracciones I y VI, 205, 206, 207, 208, fracción I, 209, 214, 215, 216, 217, fracción I y 218 del código comicial local, el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad. En el ejercicio de dicha función, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo. Además, el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del código de la materia.

Este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, de promover la cultura política democrática, y velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo, guíen todas las actividades de la institución.

Dicho órgano, tiene entre sus atribuciones la de expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del Instituto; y la de designar a los Vocales de las Juntas Distritales y Municipales, de entre las propuestas que al efecto presente la Junta General y conforme a los lineamientos que emita el propio órgano superior de dirección.

Señalado lo anterior, es conveniente precisar que, las Juntas Distritales y Municipales son los órganos desconcentrados de carácter temporal del Instituto, a través de los cuales ejerce éste sus funciones en cada uno de los distritos electorales locales y cada uno de los municipios de la entidad; por tanto, intervienen en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos comiciales en cada una de sus respectivas demarcaciones, mediante las atribuciones que la ley y la normatividad reglamentaria les conceden. Dichos órganos se integran por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación, quienes también forman parte del Consejo Distrital o Municipal respectivo; el primero de esos funcionarios en calidad de presidente y los dos restantes con el carácter de secretario, ya sea de manera habitual en el caso del Vocal de Organización, o como suplente, en tratándose del Vocal de Capacitación.

No existe disposición alguna en el Código Electoral, que prevea expresamente los requisitos para ser Vocal de las Juntas Distritales y Municipales. Sin embargo, dicho ordenamiento sí señala los requisitos que deben cumplir los miembros de los consejos respectivos, que serán los mismos que deben satisfacer los consejeros del Consejo General del Instituto, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al distrito o al municipio de que se trate, y el de título profesional que no será necesario.

En ese contexto, este Consejo General de conformidad con el artículo 185, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, puede expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento, debiendo respetar el principio de legalidad y de supremacía constitucional, para que las normas que emita sean en estricto cumplimiento de la ley, estando subordinados a ésta, entre ellas las relacionadas con las que deban ser aplicables para la designación de Vocales Distritales y Municipales.

Con base en dicha facultad, este Consejo General, en su sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, aprobó el acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, denominado "Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015", el cual contiene los lineamientos en mención, el procedimiento para designar las vocalías de los referidos órganos desconcentrados, y la convocatoria dirigida a los ciudadanos que aspiraran a ocupar esos cargos.

Dicha convocatoria señala, entre otros, los requisitos que debían cumplir los ciudadanos interesados en participar, quedando incluido para el presente asunto, en su Base Tercera, fracción VIII, lo siguiente:

**"Tercera. De los requisitos.**

De conformidad con lo dispuesto, los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

...

VIII. No estar afiliado a ningún partido político.

...

Del requisito en cita, se deriva una condicionante para tenerlo por cumplido, que es el no estar afiliado a ningún partido político.

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Estado de México, en las resoluciones recaídas a los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificadas con las claves JDCL/5/2014, RA/9/2014, y JDCL/44/2014, se pronunció en relación a determinados requisitos que **no se encuentran** en el artículo 178 del Código Comicial, y que se establecieron en la convocatoria para Vocales Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, los cuales se refieren a: **Base Primera. De los participantes. Podrán participar todos los ciudadanos del Estado de México, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, inscritos en el Padrón Electoral del Estado de México, con residencia en el municipio y distrito electoral local donde pretenden prestar sus servicios, que no cuenten con empleo remunerado alguno al día de su designación y que estén interesados en ocupar un puesto eventual de tiempo completo, con funciones directivas en alguna de las juntas distritales y municipales del Instituto electoral del Estado de México; para atender todo lo relativo al Proceso Electoral 2014-2015, considerado lo establecido en el artículo 413 del Código Electoral del estado de México, y Base Tercera. De los requisitos. De conformidad con lo dispuesto, los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos: XIII. No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria.**

En esencia el órgano jurisdiccional electoral sostuvo que al ser emitidos el Programa General y la convocatoria atinente, en ejercicio de la facultad reglamentaria que le concede el artículo 185, fracción I, del código de la materia, este Consejo General del Instituto estaba compelido a respetar los principios de reserva de ley y supremacía constitucional.

En este orden, señaló que el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 2º de la Constitución General de la República establece un principio de reserva de ley, según el cual, los requisitos que deben cumplir los ciudadanos que aspiren a ser consejeros de los órganos administrativos electorales locales, deben estar previstos en un ordenamiento que tenga el rango de ley; asimismo, que el artículo 11, de la Constitución particular del Estado de México también establece ese principio de reserva, en cuanto que la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México, serán determinadas por la ley respectiva. Así, a efecto de salvaguardar el citado principio de reserva, el artículo 178 del Código comicial local establece, los requisitos que deben reunir los consejeros del Consejo General del Instituto, mientras que el diverso numeral 218, señala que los consejeros de los Consejos Municipales, deberán satisfacer esos mismos requisitos, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al municipio de que se trate, y el de título profesional, que no será necesario.

De este modo, la máxima instancia jurisdiccional electoral de la entidad, con apoyo en el criterio que ella misma sostuvo en el diverso juicio ciudadano **JDCL/1/2014**, consideró que los Vocales Ejecutivo, de Organización Electoral y de Capacitación de las Juntas Municipales, también forman parte de los Consejos respectivos, con los cargos que se mencionan en párrafos anteriores, por lo que los aspirantes a ocupar las vocalías deben cumplir los requisitos contenidos en el citado artículo 178, conforme lo señala el diverso 218.

Luego, al no estar previsto en dichos preceptos los requisitos consignados en las Bases Primera y Tercera, fracción XIII, de la multialudada convocatoria, el Tribunal Electoral local concluyó eran ilegales, pues no tienen sustento jurídico alguno para su exigencia, por lo que este Consejo General del Instituto se extralimitó en el ejercicio de su facultad reglamentaria al incluirlos en dicha convocatoria. Estimando que la ilegalidad de tales requisitos deriva también de que contienen por una parte una limitante al empleo remunerado y por otra, una restricción absoluta con respecto a la relación laboral entre el aspirante a vocal y la administración pública municipal, esto es, con independencia de la clase y grado de esa relación.

Ahora bien, en el presente caso, el requisito en estudio es el contenido en la Base Tercera, fracción VIII, de la citada convocatoria cuyo contenido es el siguiente:

Fracción VIII. No estar afiliado a ningún partido político.

Por su parte, el Código Electoral del Estado de México, en su artículo 178, establece:

**Artículo 178.** Los consejeros electorales, así como el Presidente del Consejo General, deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiriera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

III. Tener más de treinta años de edad al día de la designación.

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura.

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

VI. Ser originario del Estado de México o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses.

VII. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido en los cuatro años anteriores a la designación.

IX. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.

X. No ser ministro de culto religioso.

XI. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación, como de las entidades federativas; ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador ni Secretario de gobierno o su equivalente a nivel local. No ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.

XII. No ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad.

...

Como puede apreciarse, el requisito consistente en *"No estar afiliado a ningún partido político"*, no se encuentra contenido en el artículo 178, del Código Comicial de la Entidad, de tal manera que, este Consejo General considera que el criterio establecido por el Tribunal, respecto a diversos requisitos se debe aplicar por

analogía al presente asunto, de conformidad a lo estipulado por los numerales 116, fracción IV, inciso c,) numeral 2º, de la Constitución Federal y 11, de la Constitución Local, que contemplan el principio de reserva de ley.

Lo anterior es así, toda vez que, al negarle al ciudadano en cuestión, el derecho a integrar a las autoridades electorales, por no cumplir un requisito de elegibilidad, que no se encuentra entre los exigidos por la normatividad electoral, se estaría afectando en forma trascendente el derecho de igualdad y participación política en su modalidad de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, con fundamento en la fracción VI, del artículo 35 de la Ley Suprema.

Pues, como ya fue señalado anteriormente, los ciudadanos tienen el derecho a ser nombrados en cualquier empleo o comisión y participar en la dirección de los asuntos públicos de forma directa a través de tener la posibilidad de integrar un órgano electoral, como uno de los derechos que deben ser tutelados por toda autoridad en el país.

De tal manera que tales requisitos deben ser sólo los que racionalmente resulten adecuados y proporcionales, porque de lo contrario, es decir, si se imponen requisitos irracionales o excesivos, se haría nugatorio el ejercicio de dicho derecho.

De ahí que, por disposición constitucional el derecho de todo ciudadano a ser nombrado para cualquier empleo o comisión sólo puede ser restringido si incumplen las calidades o requisitos que establezca la ley.

Por lo que, cualquier limitación o restricción a un derecho fundamental, debe estar encaminada a protegerlo e incluso potenciarlo, de tal suerte que se favorezca su ejercicio en la expresión más plena por parte de quien lo detente.

Es decir, los derechos fundamentales de carácter político-electoral que consagra la Constitución Federal, como son el derecho de votar, ser votado, de asociarse y de afiliarse, tienen como objetivo primordial promover la democracia representativa, por lo tanto, dichos derechos no pueden ser limitados ni excluidos, sirviendo de sustento a lo anterior, la siguiente jurisprudencia consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.-** Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino

de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.

**Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.*

De manera que, si bien los derechos fundamentales no son derechos absolutos o ilimitados, al ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que se encuentren previstas en la legislación, y no sean irracionales, injustificadas y desproporcionadas respecto al fin para el cual se establecen, o que se traduzcan en la privación del contenido esencial del derecho fundamental o de un principio constitucional; de la misma manera, tampoco las restricciones deben ser absolutas o ilimitadas, ya que las incompatibilidades previstas en la ley se transformarían en inhabilitaciones o calificaciones de forma negativa en detrimento de las personas que pretendan participar en un procedimiento de designación de los integrantes de las autoridades electorales.

Por lo que, exigir un requisito que no es conforme al principio de reserva de ley, haría nugatoria la participación de los ciudadanos.

**b) Constancias que obran en el expediente.**

A través del escrito indicado en el resultando 5 de la presente resolución, el Partido de la Revolución Democrática, objeto la designación de la persona en comento, por considerar que incumplía el requisito arriba citado, aduciendo en esencia lo siguiente:

“ ...

Revisando el padrón de afiliados del PRI en el siguiente enlace: <http://pri.org.mx/transformandoamexico/NuestroPartido/Miembrosafiliados.aspx>, aparece el nombre de **MARCO ANTONIO GALVÁN GUTIERREZ**,...

...

Lo anterior prueba que aún se encuentra afiliado a dicho Instituto Político y vigente en sus derechos ya que de acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACION DEL PADRON DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES PARA LA CONSERVACION DE SU REGISTRO, el padrón que se encuentra en la página del PRI fue actualizado considerando el numeral cuarto de dichos LINEAMIENTOS...”

Así las cosas, ante la evidencia del posible incumplimiento de los requisitos señalados en la convocatoria para la designación de Vocales, la Secretaría Ejecutiva, ordenó integrar el expediente del asunto especial que se resuelve, a efecto de determinar si el ciudadano en cuestión efectivamente incurrió en dicho incumplimiento y, en su caso, dejar insubsistente su nombramiento y proceder a su sustitución.

En esta virtud, se concedió al ciudadano cuestionado su garantía de audiencia, en cuyo desahogo señalo sustancialmente lo que enseguida se transcribe:

“ ...

**PRIMERO.-** Por medio de la presente y en atención al expediente al rubro citado vengo a desahogar mi garantía de audiencia en relación a la objeción que hace el **C. JAVIER RIVERA ESCALONA**, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en el que manifiesta según su dicho que me encuentro como afiliado al Partido Revolucionario Institucional, mencionando en su escrito de objeción con número de oficio **RPC/IEEM/012/2014**, de fecha 13 de noviembre del año 2014. Ya que dicha objeción carece de fundamento legal alguno, por lo que deseo manifestar que niego categóricamente lo hechos que se me imputan, ya que en la página de internet que menciona en su escrito de objeción multicitado, hace referencia de que me encuentro afiliado al Partido Revolucionario Institucional, en donde aparece un listado de nombres en donde se encuentra registrado un nombre similar al mío, con lo cual se pretende probar que se trata de mi persona. Sin en cambio, este medio carece de datos suficientes para corroborar la personalidad de quien según su dicho es el de la voz o en su caso se trate de un homónimo. Toda vez que mi actuación como Servidor Público Electoral siempre ha sido apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de México, Código Electoral del Estado de México y demás ordenamientos legales aplicables al caso concreto, páralo cual hago mención de lo siguiente:

**SEGUNDO.-** Deseo enfatizar que en ningún momento me he afiliado, ni pertenezco a ningún Partido Político, como lo manifiesta en su escrito de objeción mencionado con antelación el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ya que su dicho se basa únicamente en una página de internet en la cual aparece un nombre similar al de la voz, el cual desconozco si sea un homónimo o qué relación tenga con mi persona, en cual no hace mención con toda claridad, así como circunstancias de lugar tiempo y modo para sustentar su dicho conforme a Derecho.

**TERCERO.-** Cabe hacer mención que al emitir el Instituto Electoral del Estado de México la Convocatoria para Aspirantes a Vocales Distritales y Municipales en el mes de agosto del año 2014, me inscribí de manera formal para el cargo de Vocal Municipal para el Municipio de Tultepec, México; en fecha 20 de agosto del año 2014 en el cual se me asigno el folio SMO080053 dando cumplimiento en tiempo y forma en todas y cada una de las bases de dicha convocatoria; así mismo entregue en original **CARTA DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** en la cual manifiesto de manera categórica cubrir cada uno de los requisitos estipulados, entre los que se destaca el no estar afiliado a ningún partido político; dichas documentales que en su momento entregue, para efectos de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos establecidos, obran en los archivos del Instituto Electoral del Estado de México.

...

Aunado a lo anterior, obran en el expediente las siguientes constancias:

Con motivo de las solicitudes realizadas por la Secretaría Ejecutiva, se encuentran agregadas:

- A) Original del acuse de recibo del oficio número IEEM/SE/1721/2014, de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil catorce, mediante el cual se solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, el Lic. Eduardo G. Bernal Martínez, informara a la Secretaría Ejecutiva, si el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, se encuentra afiliado al partido que representa.
- B) Original del acuse de recibo del oficio número IEEM/SE/2085/2014, de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, mediante el cual y en alcance al diverso IEEM/SE/1721/2014, se solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, el Lic. Eduardo G. Bernal Martínez, informara a la Secretaría Ejecutiva, si el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, se encuentra afiliado al partido que representa.

El ciudadano cuya designación se cuestiona no aportó elementos de prueba.

De la página web exhibida por el Partido de la Revolución Democrática, donde anexa en su escrito inicial una impresión supuestamente de la página electrónica del Partido Revolucionario Institucional, solo se desprende un listado de nombres en el que aparece el nombre de Marco Antonio Galván Gutiérrez, sin que contenga ningún otro dato de identificación, ni fecha en que se extrajo dicha prueba.

Con relación a la referida probanza, los Tribunales Colegiados de Circuito, en la Tesis de Jurisprudencia XX.2o. J/24, con número de registro 168124, correspondiente a la novena época, han sostenido:

**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.** Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, **el nombre de un servidor público**, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.

Nota: lo resaltado es propio.

Así, como en la Tesis aislada I.3o.C.35 k, de la Décima época, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.** Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un

hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.

De lo antes expresado, resulta evidente que las publicaciones, en medios electrónicos emitidas por los partidos políticos, constituyen por sí mismas un hecho notorio que puede ser utilizado por autoridades jurisdiccionales.

Lo anterior es así, ya que si bien los partidos políticos no son órganos de gobierno, estos de conformidad con el artículo 37, del Código Electoral del Estado de México, son entidades de interés público, cuya finalidad es la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo en la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público.

En atención a lo considerado, el enlace y la impresión presentada como medio de prueba por el Partido de la Revolución Democrática, permite solamente presumir el hecho de que el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, aparece en la lista de afiliados publicada en la página web del Partido Revolucionario Institucional, sin que se pueda deducir que se trate de la misma persona o bien de un homónimo, como lo manifestó el propio ciudadano objetado en su escrito de garantía de audiencia.

Así, de las constancias que obran en el expediente, estas generan únicamente la presencia de un indicio sobre la veracidad o autenticidad respecto a la afirmación que realiza el Partido de la Revolución Democrática a través de su representante propietario el C. Javier Rivera Escalona, en relación a que el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, pudiera estar afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior cobra fuerza, en relación a que dicho instituto político en su escrito inicial no aportó medio de prueba diverso que pudiera sustentar su afirmación. Por lo tanto, al ser este a quien corresponde la carga de la prueba, debió presentarlas desde un inicio, o en su caso, identificar de manera clara aquellas que habrán de requerirse o consultarse cuando no haya tenido la posibilidad de recabarlas por cuenta propia o bien señalar la autoridad en cuyo poder se encuentren.

Por lo tanto, el documento en análisis, por sí mismo no constituye un elemento de convicción suficiente para acreditar de manera indubitable que el ciudadano en comento se encuentre afiliado al Partido Revolucionario Institucional.

Sin embargo, con independencia de que se acreditara el incumplimiento del requisito contenido en la Base Tercera fracción VIII, de la convocatoria, este Consejo General considera que analizados los precedentes y criterios orientadores reiterados por el órgano jurisdiccional local, es pertinente arribar a una nueva reflexión y dejar subsistente el cargo que ocupa el C. Marco Antonio Galván Gutiérrez como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México, la anterior conclusión se sostiene en los criterios sustentados por el Tribunal Electoral del Estado de México, en diversos asuntos por haber declarado como ilegal y excesiva la facultad reglamentaria ejercida por este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, al emitir la convocatoria correspondiente.

Aunado a que, adecuarse a dichos criterios garantiza el derecho político electoral del ciudadano objetado de integrar autoridades electorales correlacionado con el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a todos los ciudadanos mexicanos el derecho de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, máxime que el ciudadano designado ha demostrado reunir las cualidades que establece la ley.

Con base en lo expuesto, este Consejo General considera que el ciudadano cuestionado debe continuar en el cargo como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109, con sede en Tultepec, México.

Visto lo anterior y atento a las constancias respectivas con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número **IEEM/CG/68/2014**, este órgano superior de dirección.

## **RESUELVE**

**PRIMERO.** Queda subsistente el nombramiento del C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109 con sede en Tultepec, México, en términos de lo razonado en el considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** No ha lugar a acordar la sustitución del C. Marco Antonio Galván Gutiérrez, Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal número 109 con sede en Tultepec, México, en atención a las consideraciones expresadas en el considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

**NOTIFÍQUESE** personalmente al C. Marco Antonio Galván Gutiérrez y por estrados la presente resolución, lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva.

**ARCHÍVESE** en su oportunidad como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los CC. Consejeros Integrantes presentes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria de fecha once de febrero del año dos mil quince.

**"TU HACES LA MEJOR ELECCIÓN"**

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL  
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL**

VMCT/avm/sgv

IEEM/SE/AE/37/2014